

La Crisis Creciente de Niños Soldado en Colombia

Por www.360geopolitica.org

Colombia enfrenta una crisis que se intensifica rápidamente, relacionada con niños soldados, violaciones de derechos humanos y sufrimiento humanitario. La iniciativa “Paz Total” del presidente Gustavo Petro ha fortalecido a los grupos armados ilegales, expandido redes criminales y dejado a miles de niños vulnerables al reclutamiento, la explotación sexual y la muerte.

Este entorno político permite que los grupos armados y organizaciones criminales continúen esclavizando sexualmente a niños, reclutándolos por la fuerza como soldados y coaccionándolos para traficar drogas o participar en conflictos violentos contra el Estado y la población civil.

En su núcleo, esto refleja un enfoque político que prioriza la negociación con estos actores, incluso frente a graves violaciones de derechos humanos. Expone una mentalidad que trata a niños y jóvenes no como titulares plenos de derechos, sino como peones en una estrategia política, sacrificando su seguridad y futuro por objetivos políticos.

Paz Total

La magnitud de la iniciativa Paz Total es mucho mayor de lo que comúnmente se reconoce. El gobierno del Reino Unido informa que la administración de Petro está negociando con aproximadamente 25 grupos armados y bandas criminales, mientras que ACAPS señala que al menos 22 grupos han expresado formalmente su interés, con 10 facciones menores aceptando un alto el fuego multilateral. Cuatro grupos armados principales –ELN, Clan del Golfo, Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia– junto con 23 bandas criminales, supuestamente participan activamente en las negociaciones.

La iniciativa se presenta como un proceso de doble vía, separando los grupos guerrilleros políticamente motivados –de los que Colombia no tiene– de las estructuras criminales “obligadas a someterse a la justicia.” Sin embargo, los expertos advierten que el gran número y la diversidad de participantes han creado un proceso altamente fragmentado e inestable, planteando serias dudas sobre la supervisión, la aplicación y la viabilidad final de la estrategia.

Desde la elección de Petro –aun legalmente impugnada– el gobierno ha decretado ceses al fuego unilaterales que han favorecido aumentos dramáticos en los grupos armados ilegales y el crimen organizado. Las disidencias de las FARC crecieron de 3,275 a 9,634 miembros, el Clan del Golfo casi se duplicó de 4,061 a 8,945, y el ELN se

expandió de 5,885 a 6,699 (Revista Semana, 8 de noviembre de 2025).

Estos números dejan claro que, en lugar de reducir la violencia, Paz Total ha fortalecido a los actores que la perpetúan, consolidando apoyo a Petro y sus aliados políticos. Al mismo tiempo, otras bandas criminales han aumentado dramáticamente, intensificando la inseguridad en todo el país.

Reclutamiento Forzado de Niños

Las víctimas más vulnerables de Paz Total son los niños y jóvenes de Colombia. Entre 2022 y 2024, las Naciones Unidas verificaron al menos 474 casos de reclutamiento infantil, mientras que UNICEF reportó un aumento del 64% solo en 2024. Las comunidades indígenas y afrocolombianas son desproporcionadamente afectadas, y las niñas representan casi el 40% de las víctimas.

ONGs estiman que al menos 1,800 niños fueron involucrados en conflictos armados entre 2022 y 2023, con la Defensoría del Pueblo documentando 625 casos en 2024 y 162 en 2025. Se reporta que los grupos armados no estatales reclutaron 919 niños por año durante 2023-2024, y el gobierno colombiano rescató 447 niños en 2024, esfuerzos que solo cubren una fracción de los que están en riesgo.

Las vulnerabilidades estructurales –incluyendo pobreza, desplazamiento, falta de educación y débil presencia estatal– crean un terreno fértil para el reclutamiento, a menudo facilitado a través de redes sociales. Los casos aumentaron de 37 en 2021 a más de 600 en 2024, exponiendo fallas sistémicas en la protección de los niños a pesar de los programas de reintegración.

Miles de niños siguen siendo coaccionados a ingresar a grupos criminales, con consecuencias devastadoras para su seguridad, desarrollo y futuro. En algunos casos, son utilizados como esclavos sexuales.

Niños Soldado como Víctimas de la Acción Militar Trágicamente, los niños y jóvenes no solo son reclutados por grupos armados o el crimen organizado, sino que también mueren en operaciones militares. A principios de noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo informó que bombardeos del ejército colombiano habían matado a ocho niños en la región del Vaupés, cifra luego revisada a quince por autoridades forenses al considerar bombardeos en Cauca y Caquetá. Las ONGs expresaron indignación –la primera en más de tres años y medio.

El gobierno del presidente Petro ha tergiversado consistentemente el número, la ubicación y los objetivos de los bombardeos, ocultando la magnitud real de las víctimas civiles, niños y jóvenes.

El CICR ha advertido que los niños en Colombia están cada vez más atrapados en el conflicto armado, explotados tanto por actores estatales como no estatales. Enfrentan reclutamiento, exposición a explosivos, desapariciones y el colapso de estructuras comunitarias protectoras. A través de diálogo confidencial y defensa, el CICR insta a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario, adoptar “acuerdos especiales” y crear espacios protegidos como escuelas. A pesar de estas medidas, los niños siguen atrapados en un ciclo de violencia, subrayando la urgente necesidad de acciones humanitarias y legales decisivas para proteger sus vidas, seguridad y futuro.

Ni la Defensoría del Pueblo, ni las ONGs, ni actores internacionales –incluyendo ONU, UE y Suecia, que legalmente debe realizar una evaluación humanitaria y de derechos humanos antes de vender 17 aviones Gripen a Colombia– han proporcionado al público un relato preciso de la situación. Los intereses políticos y económicos parecen dictar este silencio, eclipsando la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, la comunidad internacional en gran medida ha hecho la vista gorda ante estas atrocidades. COP16 (octubre-noviembre de 2024) y CELAC-UE (noviembre de 2025) se llevaron a cabo en Colombia, a pesar de que los grupos armados ilegales y el crimen organizado controlan casi el 75% del país –incluyendo regiones como Catatumbo, Cesar, Cauca, Antioquia, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Nariño, Huila, Chocó, La Guajira y Putumayo– donde las redes criminales prosperan y millones de colombianos sufren reclutamiento forzado, explotación sexual y matrimonio infantil.

Para acomodar estos eventos, vastos territorios quedaron sin defensa, con policía y ejército red desplegados ostensiblemente para proteger a dignatarios visitantes –una medida que constituye una aparente violación del derecho internacional humanitario. Desde **julio de 2024**, el ejército colombiano ha realizado al menos catorce bombardeos contra grupos armados, sin proporcionar transparencia sobre las víctimas civiles o infantiles (El Tiempo, El Espectador, Semana).

En solo tres bombardeos desde **agosto de 2025** –información que solo emergió mediante filtraciones– se reportó la muerte de quince niños. Quedan preguntas críticas sin responder: ¿cuáles fueron los impactos sobre los civiles de las otras operaciones, y por qué la comunidad internacional ha hecho la vista gorda ante estas acciones?

La trágica realidad es clara: los niños y jóvenes de Colombia están atrapados en la intersección del

conflicto armado y la inacción gubernamental, y la falta de respuesta internacional agrava una crisis de derechos humanos y humanitaria de proporciones inmensas.

En noviembre de 2019, el ejército colombiano llevó a cabo un ataque aéreo contra un campamento de disidentes de las FARC en Caquetá. Destinado a atacar combatientes armados, la operación resultó trágicamente en la muerte de al menos ocho niños, algunos reclutados por el grupo.

Organizaciones de derechos humanos condenaron el ataque, resaltando el fracaso en proteger a los menores y subrayando el problema más amplio del reclutamiento infantil por parte de grupos armados. Políticamente, el incidente llevó a la renuncia del Ministro de Defensa Guillermo Botero e impulsó un debate nacional sobre tácticas militares y adherencia al derecho internacional humanitario.

En ese momento, los informes gubernamentales afirmaban que no había civiles ni niños presentes. Investigaciones posteriores revelaron, sin embargo, que los civiles y niños habían sido deliberadamente ocultados por grupos armados y usados como escudos humanos para minar la credibilidad del gobierno.

Actores políticos, incluido el presidente Petro (entonces senador en 2019) y aliados como Iván Cepeda, Claudia López, Angélica Lozano y Juanita Goebertus, amplificaron el incidente en una campaña nacional –pero hoy permanecen conspicuamente silenciosos. Respaldados por actividad coordinada en línea vinculada al régimen de Maduro, ayudaron a desencadenar protestas que escalaron al Estallido Social, movilizando al público bajo el lema “Nos están matando.”

Desde agosto de 2022, grupos armados vinculados a la iniciativa Paz Total de Petro han usado repetidamente civiles como escudos humanos en asonadas, ataques súbitos de multitudes destinados a obstruir operaciones militares. En varios casos, las multitudes se materializaron por sorpresa, aparentemente en coordinación con grupos criminales para bloquear al ejército colombiano, como en noviembre de 2019.

Investigaciones de la revista Semana documentan al menos 55 incidentes de este tipo hasta la fecha, con más de 44 ocurriendo solo en 2025. La Fiscalía General confirma 52 asonadas este año, muchas dirigidas directamente al personal militar.

El presidente Petro ha defendido estas concentraciones como expresiones de apoyo civil a los grupos criminales y a las negociaciones de Paz Total. Sin embargo, el patrón revela una realidad mucho más preocupante: los *civiles, incluidos niños y jóvenes, están siendo*

deliberadamente expuestos al peligro. El apoyo social se está convirtiendo en un arma, planteando preguntas urgentes sobre la seguridad del ejército colombiano y la efectividad de la estrategia Paz Total.

Esta táctica, empleada por Petro, sus aliados y los actores actuales de Paz Total, también se ha utilizado para desacreditar a gobiernos anteriores, convirtiendo complejos desafíos de seguridad en palanca política.

Las acciones de Petro, sus aliados políticos y figuras asociadas a la iniciativa Paz Total demuestran un *desprecio consistente* por la seguridad de niños, jóvenes y otros civiles. Su conducta parece motivada menos por preocupaciones de seguridad pública o justicia y más por esfuerzos para consolidar influencia política de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

A través de esta alianza, Petro, el Pacto Histórico y los actores de Paz Total ejercerían control sobre elecciones en territorios donde la oposición y la sociedad civil están intimidadas, socavando la participación democrática en amplias zonas del país.

Conclusión y Recomendaciones

Los niños y jóvenes de Colombia están atrapados en la mortal intersección de conflicto armado, empresa criminal e inacción gubernamental. La iniciativa Paz Total ha, por un lado, empoderado a grupos criminales, fragmentado la aplicación de la ley y expuesto a los civiles a riesgos severos.

Por otro lado, ha logrado intimidar a opositores – algunos requieren hasta 15 guardaespaldas– y al público colombiano en general. En una declaración, el Ministro de Salud se dirigió a los colombianos con una advertencia implícita: “¿Quieren otro Estallido Social?”

Afortunadamente, el CICR ha mantenido consistentemente su mandato y lo ha operado en su totalidad.

Se requiere acción inmediata:

Transparencia y rendición de cuentas: El gobierno colombiano debe informar completamente sobre víctimas, ubicaciones y el verdadero alcance de las operaciones militares.

Protección de niños y jóvenes: Programas nacionales e internacionales urgentes deben prevenir el reclutamiento y garantizar la seguridad de poblaciones vulnerables.

Programas de reintegración bien financiados: Se necesitan para brindar educación, apoyo psicológico y medios de vida a ex niños soldados.

Supervisión internacional: ONU, UE y otros actores deben proteger a los civiles, especialmente a niños y jóvenes.

Aplicación focalizada: Grupos armados ilegales que explotan las concesiones de Paz Total deben rendir cuentas por reclutamiento infantil, explotación sexual y otros crímenes.

Bogotá, Colombia, 21 de noviembre de 2025.